

Núm. de recurso: 2023/REC\_01000017

Núm. de resolución: 11/2023

Por medio de la presente, se le notifica que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado la siguiente:

**RESOLUCIÓN Nº: 11/2023, de 6 de noviembre**

**“VISTO** el recurso interpuesto por D. Francisco Javier Sigüenza Hernández, en nombre y representación de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (en adelante, ASADE), con CIF G83040659, contra los pliegos para la contratación del *“servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de La Zubia, regulado por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y del Plan concertado de prestaciones básicas”*.

Este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero:** Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Zubia de 1 de agosto de 2023 se acordó la aprobación del expediente para la *“Contratación del Servicio de Ayuda a domicilio en el término municipal de La Zubia, regulado por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y del Plan concertado de prestaciones básicas”*, acuerdo que fue adoptado por unanimidad.

Dicho expediente contiene el pliego de cláusulas administrativas particulares, suscrito por la técnica de gestión de Área de Secretaría y Contratación.

El valor estimado del contrato asciende a 6.912.881,52 euros.

El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público estatal el 12/08/2023 y en el Diario Oficial de la Unión Europea el 14/08/2023.

**Segundo:** ASADE interpuso recurso especial en materia de contratación en el registro del órgano de contratación, contra los pliegos que han de regir la licitación y que forman parte del acuerdo citado en el punto anterior.

**Tercero:** No se han presentado alegaciones.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	1/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		



## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** En primer lugar, hay que afirmar la competencia de este Tribunal para conocer del recurso en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y el Reglamento provincial que lo regula (BOP de 31/12/2012), al haberse impugnado los pliegos de un contrato de servicios de valor estimado superior a los cien mil euros (arts. 44.1.a y 2.a de la LCSP).

El Ayuntamiento de La Zubia se encuentra adherido al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada.

**SEGUNDO.-** El recurso tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de La Zubia el 01/09/2023, por tanto, dentro del plazo señalado en el artículo 50.1 d) de la LCSP.

**TERCERO.-** El recurso ha sido presentado por D. Francisco Javier Sigüenza Hernández, en nombre y representación de ASADE, representación que acredita mediante escritura de elevación a público de acuerdo sociales otorgada ante el notario de Madrid D. Luis Quiroga Gutiérrez, el 24 de noviembre de 2009, con el número 3347 de su protocolo.

Según dispone el artículo 48 de la LCSP, podrán interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

ASADE se define en sus estatutos como una como una entidad de ámbito estatal para la integración, representación y defensa de los legítimos intereses de sus miembros y de la actividad empresarial consistente en actividades empresariales en el sector de atención a las personas dependientes, y desarrollo de la promoción de la autonomía personal: [...], servicio de ayuda o de atención a domicilio (SAD), teleasistencia, así como cualquier otro servicio social a las personas de naturaleza similar; y tiene como fines, entre otros, la representación colectiva, participación y defensa más amplia de sus socios de la actividad que desarrollan y de sus derechos y prestigio ante los poderes públicos y cualesquiera otras entidades, públicas o privadas, estatales o internacionales y la representación de sus asociados ante los juzgados y tribunales de toda índole y jurisdicción y en aquellos organismos o comités, públicos o privados, nacionales o internacionales, cuando así se decida por los asociados.

Por ello, se la considera legitimada para interponer este recurso.

**CUARTO.-** En el primer motivo del recurso el recurrente reprocha al estudio económico que consta en el expediente que no contiene suficiente detalle en lo atinente a los costes salariales, lo que supondría, a su juicio, una violación de lo dispuesto en el artículo 102 de la LCSP.

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





La insuficiencia de desglose de gastos la concreta en los siguientes conceptos:

*“El PBL no indica de forma desglosada y con desagregación de género los costes salariales estimados a partir del Convenio laboral de referencia y aplicable al personal a subrogar.*

*Deberían incluirse explícitamente en el desglose de los costes directos de mano de obra, entre otras partidas, el absentismo, vacaciones, plusas fuera de Convenio, Seguridad Social, etc., siendo que, en caso de ser de empresa o centro de trabajo, facilitarse el mismo. Y, sobre todo, informar sobre los atrasos que hubiese pendientes en función de los acuerdos recogidos en el Convenio Colectivo de aplicación.*

*No consta ni se determinan en debida forma los costes directos, los costes indirectos, costes por EPIS, Formación, gastos COVID, etc., más allá de una vaga estimación que se hace de forma agregada de todos los conceptos que el Órgano de Contratación denomina como “OTROS COSTES DIRECTOS DEL PERSONAL”.*

**QUINTO.-** El segundo motivo de recurso deviene de una supuesta inviabilidad económica del presupuesto base de licitación y del valor estimado por no haber tenido en cuenta los costes salariales reales vigentes en el momento de ejecución del contrato, de tal modo que la Administración había fijado los costes salariales en función e la financiación recibida por la Junta de Andalucía.

En todo caso, alega el recurrente, no se habría tenido en cuenta el convenio colectivo de aplicación, pues se han aplicado las tablas salariales de 2022 de un convenio colectivo que ya no está en vigor, para un contrato que ha de desarrollarse necesariamente hasta finales de 2025, con la posibilidad de que se prorrogue dos años más.

El 9 de junio fue publicado en el BOE la Resolución de 30 de mayo de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, el cual tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2025, y que prevé unos incrementos salariales para años futuros: 2023 (4%), 2024 (2,5%) y 2025 (2,5%); una reducción de la jornada laboral para 2024 (8 horas) y 2025 (12 horas); además de *“la inclusión de un complemento de incapacidad laboral por accidente laboral o enfermedad profesional hasta el 100%, 95% y 90% durante los 180 primeros días de la baja”*.

Alude el recurrente a la firma el pasado 1 de mayo del I Convenio del Servicio de Ayuda a domicilio de Andalucía, con una vigencia desde 2023 a 2027, el cual conlleva incrementos salariales y reducciones de jornada:

*“se acuerda un incremento salarial de un 21% para dicho periodo, distribuido del siguiente modo: 4% para 2.023, 2,5% para 2.024, 2,5% para 2.025, 4% para 2.026 y 8% para 2.027.*

*Además, este Convenio dispone la reducción progresiva de la jornada laboral pasando de las 1.755 horas anuales fijadas para 2.022 a las 1.707 para el año 2.027, lo que igualmente conlleva, de facto, el incremento de la masa salarial”.*

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





Y si bien admite, implícitamente, que el mismo no se encuentra oficialmente publicado, expone que ha sido tal su publicidad, que el órgano de contratación no podía desconocerlo.

**SEXTO.-** Por último, y como tercer motivo del recurso, aduce el recurrente la omisión efectuada en el estudio económico de determinados conceptos retributivos incluidos en el convenio sectorial y que suponen un coste laboral. Entre ellos, el tiempo de desplazamiento entre usuarios, los días de libre disposición, los descansos retribuidos y las horas sindicales.

Considera, finalmente, que es claramente insuficiente el 2% de incremento sobre el precio/hora del servicio previsto en el convenio para cubrir los siguientes conceptos: plus de antigüedad, plus de nocturnidad, plus de domingos y festivos, plus de disponibilidad, horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias, gastos de desplazamiento, así como cualquier otro aspecto relacionado con los costes del personal; además de los costes indirectos de personal.

**SÉPTIMO.-** Por su parte, el órgano de contratación se pronuncia a través de un informe emitido por la técnica de secretaría y contratación, en el que manifiesta lo siguiente:

*“Se han tenido en cuenta los costes directos, es decir, los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia, según cada uno de los grupos profesionales, los gastos materiales, y por otro lado los costes indirectos y eventuales.*


*Se han tenido en cuenta las previsiones del grupo de expertos del Gobierno en lo relativo a la definición de la senda del salario mínimo interprofesional (SMI) para los próximos años (senda intermedia para los años 2022, 2023, 2024 y 2025), la actualización de las tablas salariales del VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal vigente a la fecha, así como, la Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Auto de la Audiencia Nacional, sobre sentencia referida a las tablas salariales del año 2022 del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal, publicada en el BOE número 273, de 14 de noviembre de 2022.*

*Para la determinación de los costes salariales se han aplicado las actualizaciones por IPC real previstas por el INE y las estimaciones de distintas entidades financieras para los años 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027.*

*Definimos el IPC real y previsto en el siguiente cuadro:*

AÑO	IPC
2019	1,00 %
2020.	1,10 %
2021.	0,50%
2022	6,10%
2023	9,00%
2024	4,80%
2025	2,20%

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14	
Observaciones		Página	4/9	
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>			



2026 2,20%  
2027 2,20%".

Finalmente establece un estudio comparativo entre las previsiones salariales del estudio económico, que son procedentes de las tablas salariales de 2022 (VII Convenio), actualizadas con unos determinados coeficientes, derivados de las previsiones del INE, con las del VIII Convenio, llegando a la conclusión de que se ha establecido en el estudio económico una previsión de costes salariales superior a la prevista por el nuevo convenio.

**OCTAVO.-** A la vista de lo alegado por las partes, esta resolución debe determinar si el estudio económico elaborado por el Ayuntamiento de La Zubia para determinar el presupuesto base de licitación cumple con las exigencias de la LCSP, en sus siguientes apartados:

*"Art. 100.2 En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia".*

*"Art. 100.1.c) in fine: En los contratos de servicios y de concesión de servicios en los que sea relevante la mano de obra, en la aplicación de la normativa laboral vigente a que se refiere el párrafo anterior se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación".*

*"Art. 102.3 En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios".*

Sobre este aspecto, este tribunal tiene dicho, entre otras en sus resoluciones 16/2020, 17/2020 y 20/2020, lo siguiente:

*"El TACRC, igualmente, ha declarado que la determinación del precio del contrato tiene la consideración de criterio técnico y, como tal, está dotado de discrecionalidad técnica (Resoluciones 237/2017, de 3 de marzo, y 423/2017, de 12 de mayo, entre otras). En la primera de dichas resoluciones, con cita de la resolución 358/2015 decíamos a este respecto que "... al tratarse de criterios netamente técnicos gozarían de una discrecionalidad, propia de las valoraciones técnicas de los órganos de contratación, en tanto no quede completamente acreditado que se ha incurrido en un error en la apreciación.*

*Por ello hemos de presumir un acierto propio del que es conocedor de las cuestiones técnicas del contrato que se ha convocado en otras ocasiones, conoce suficientemente este y los precios a que puede enfrentarse el mercado, estableciendo, dentro de sus potestades*

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	5/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





*propias como tal órgano adjudicador, un precio del contrato que, desde este punto de vista, gozaría de una presunción análoga, a la que tienen las manifestaciones técnicas de los órganos de contratación, cuando se debaten por los licitadores las mismas.*

*Respecto de tal doctrina, entendemos que sigue plenamente en vigor la interpretación de los artículos referidos al precio y presupuesto conforme al principio de control del gasto, por lo que no se impone a la Administración un 'suelo' consistente en el precio general de mercado, sino un 'techo' indicativo, en la medida (i) en que el art. 1 LCSP sigue diciendo que "1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa."; y en la medida (ii) en que el art. 102. 3 LCSP, referido al precio, contiene una previsión idéntica al 87.1 TRLCSP ("Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.")*

*Asimismo, no hay novedad que permita negar la discrecionalidad técnica más arriba descrita.*

*Ahora bien, sí ha de reconocerse el especial protagonismo que ahora debe conferirse a los convenios colectivos, en la medida en que los arts. 100.2 y 102.3 in fine de la LCSP contienen la novedosa previsión de que en "los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia." Y que en "aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios."*

Y en la Resolución del TACRC 427/2019, de 4 de julio, declara:

*"El Tribunal Central ha declarado (por todas, Resoluciones 861/2018, de 1 de octubre y 506/2019, de 9 de mayo) que la literalidad de los artículos 100.2, 101.2 y 102.3 de la LCSP es clara, cuando impone que sea en el PCAP o en el documento regulador de la licitación, donde se desglosen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y los costes salariales estimados de forma desglosada y con desagregación de sexos, obligación cuyo incumplimiento determina la nulidad de los pliegos.*

*No obstante es preciso efectuar ciertas precisiones sobre el sentido del mandato contenido en el artículo 100.2 LCSP, en particular el último inciso de su párrafo único, que*

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: [tribunal.contratación@dipgra.es](mailto:tribunal.contratación@dipgra.es)

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	6/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





*determina “en los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia”. La particularidad de ese artículo 100.2 es la imprecisa redacción de su último inciso, pues parece referirse a todos los contratos, cuando la realidad es que se refiere a unos muy concretos y determinados. El significado de su mandato debe ceñirse a su literalidad, de forma que su ámbito ha de reducirse a los contratos singulares en los que concurra el requisito concreto que establece ese inciso, que no es que sean importantes los costes laborales de los trabajadores empleados para su ejecución en la cuantía del precio total del contrato, sino que solo se aplica en los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución forme parte del precio total del contrato.*

*En efecto, el requisito citado no puede referirse a todos los contratos en que los costes salariales sirvan para formar el precio total, pues en tal caso se encuentran todos los contratos, ya que el precio de una prestación siempre conlleva un coste directo laboral que habrá contribuido a determinar el precio. La especificación que contiene la norma, que es que el coste de los salarios de las personas empleadas en la ejecución del contrato forme parte del precio total del contrato, implica no solo que sea un coste sino que sea precio, es decir, que forme parte del precio como un elemento de él, es decir, integre precio porque éste se fije por unidades de trabajo y tiempo, tales como precio por trabajador/día o mes o años o por horas o por bolsas adicionales de horas, o por trabajos extraordinarios, o por días laborable o por días festivos.”*

**NOVENO.-** Procederemos ahora a analizar el documento “ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO” con relación a las objeciones del recurrente.

I. En lo relativo a la exigencia de identificación de los costes desglosados de personal, no se observa una desagregación por género en los términos exigidos por el artículo 100.2 de la LCSP, exigencia esta que debería haberse realizado, al menos, respecto al personal subrogado.

II. Gastos de personal, tales como pluses de antigüedad, nocturnidad, domingos y festivos, disponibilidad, horas extraordinarias y otras gratificaciones extraordinarias son calculadas como un porcentaje del 2% del precio/hora, lo que puede considerarse que entra dentro de los márgenes de discrecionalidad del ayuntamiento para determinar el presupuesto base de licitación, ya que estas no pueden determinarse todas ellas con precisión con anterioridad.

No obstante, en aras de una mayor seguridad jurídica, convendría que, en la medida de lo posible, se realizara un mayor desglose por estos conceptos, realizando una estimación de cada uno de ellas.

III. En el apartado de otros costes directos del personal, estos son descritos, pero no cuantificados de modo individualizado, sino que el estudio se limita a señalar que los gastos de vestuario y EPI, el servicio de prevención, la formación del personal y el absentismo y sustituciones se valoran en el

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: [tribunal.contratación@dipgra.es](mailto:tribunal.contratación@dipgra.es)

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	7/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





1,5% del coste de personal, sin más justificación o explicación. Sin embargo, aquí resulta exigible una mayor precisión, pues estos gastos sí que pueden ser individualizados y cuantificados previamente.

Aun admitiendo que el órgano de contratación ha de contar con cierta discrecionalidad técnica a la hora de determinar los costes directos, no parece que esta pueda llegar al punto de determinar estos por un mero porcentaje cuando es posible su individualización y cálculo.

IV. Carece de justificación que un estudio firmado el 12 de julio de 2023 no haya tenido en cuenta el VIII Convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, publicado el 9 de junio de ese año en el BOE, y que tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2025, pues con ello se viola la exigencia de los artículo 100.2, 101.1c) y 102.3 de la LCSP de que para el cálculo de las retribuciones haya de tenerse en cuenta el convenio colectivo de referencia.

Es cierto que el informe del órgano de contratación pretende justificarse indicando que el estudio económico, aunque parta de unas tablas salariales con cuantías inferiores ha previsto unos incrementos salariales porcentualmente superiores a los incluidos en el convenio, pero ni acredita fehacientemente que se ha establecido *“una previsión de costes salariales superior a la prevista por el nuevo convenio”*, ni ello desvirtuaría la exigencia legal de que los costes sean calculados respecto al convenio de referencia, que en ese momento era el publicado el 9 de junio.

El licitador, cuando realiza su oferta ha de disponer de unos datos reales de los costes salariales, que ha de ofrecerle el órgano de contratación. Un adecuado estudio de costes no solo es necesario para fijar el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, sino que es un instrumento que se ofrece al licitador para que pueda presentar una oferta adecuada a los costes reales del servicio. Un estudio con costes salariales que no responde a las exigencias convencionales del momento no es un instrumento útil, ni para el órgano de contratación ni para el licitador.

Como se indicó por el TARC, entre otras, en las Resoluciones 827/2018, de 24 de septiembre, y 569/2019, de 23 de mayo, *“a partir de la entrada en vigor de la presente LCSP (...) gozan de especial transcendencia los convenios colectivos sectoriales de aplicación para garantizar la cobertura de los costes laborales derivados de la ejecución del contrato de servicios, en los que resulte esencial la mano de obra de los trabajadores de las empresas contratistas; por lo que las normas convencionales no pueden resultar ajenas al poder adjudicador a la hora de fijar el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato”*.

Ese Tribunal ha venido declarando (por todas, Resoluciones 861/2018, de 1 de octubre y 506/2019, de 9 de mayo,) que *“la literalidad de los preceptos transcritos (por referencia a los artículos 100.2, 101.2 y 102.3 de la LCSP) es clara, cuando impone que sea en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento regulador de la licitación, donde se desglosen los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, y los costes salariales estimados de forma desglosada y con desagregación de sexos, obligación cuyo incumplimiento determina la nulidad de los pliegos”*.

V. Hubiera resultado conveniente, y propio de una Administración previsor, haber tenido en cuenta las previsiones del I Convenio del Servicio de Ayuda a domicilio de Andalucía, pero ello no puede convertirse en una exigencia legal como pretende el recurrente, pues al no haber sido publicado en el

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: [tribunal.contratación@dipgra.es](mailto:tribunal.contratación@dipgra.es)

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		





momento de aprobarse la licitación, el mismo, siendo válido, carecía de la eficacia frente a terceros que le otorga la publicidad.

Por todo lo anterior,

**VISTOS** los preceptos legales de aplicación,

**ESTE TRIBUNAL**, en sesión celebrada en el día de la fecha,

### ACUERDA

**PRIMERO.** Estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, contra los pliegos para la contratación del *servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de La Zubia, regulado por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de promoción de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia y del Plan concertado de prestaciones básicas* y en consecuencia, declarar nulos los mismos por insuficiencias en el estudio económico, por las razones expuestas en los apartados I, III y IV del fundamento jurídico noveno.

**SEGUNDO.** Notificar la presente resolución a todos los interesados en el procedimiento. Esta resolución es directamente ejecutiva y contra la misma sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 10.1 k) y l) y 11.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

LA SECRETARIA

Fdo.: Helena Barajas Alonso

C/ Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. E-mail: tribunal.contratación@dipgra.es

Código Seguro De Verificación	HEchz6zCEUG/LAws/5VRbw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Helena Barajas Alonso	Firmado	07/11/2023 07:42:14
Observaciones		Página	9/9
Url De Verificación	<a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/</a>		

